



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 033 -2017-GRJ/GRDS

Huancayo, 23 MAR. 2017

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Legal Ampliatorio N° 211-2017-GRJ/ORAJ de fecha 21 de marzo del 2017; el Reporte N° 61-2015-GRJ-DRSJ/OAJ; y el Recurso de Apelación planteado por la Sra. LEONOR VILLAVERDE RUTTI contra Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 27 de febrero del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Primero.- Conforme fluye de los actuados, mediante Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG de fecha 02 de marzo del 2016, se resuelve REASIGNAR a partir del 1° de marzo del 2016 a Doña LEONOR VILLAVERDE RUTTI con el cargo de enfermera, Nivel Remunerativo 10, del Puesto de Salud San Martín de Porras Micro Red de Salud "El Tambo" de la unidad ejecutora 408, a la Red de Salud Valle del Mantaro, Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" Huancayo en el cargo de Enfermera, Nivel 10, a la plaza con N° de CAP 738 y PAP 011, de la cadena programática 20-044-0097-99999-1563-00001, Código SIAF 0825-0097, de la Unidad Ejecutora 402 - Salud "El Carmen" Huancayo.

Segundo.- Con fecha 20 de diciembre del 2016, la Sra. DIONISIA PASCUALA CATAÑO CRISOSTOMO, solicita la nulidad de resolución mencionada en el considerando anterior, manifestando que adolece de vicios que causan su nulidad de pleno derecho, puesto que no se le ha recocado su derecho de realizarse concurso interno en la plaza ocupada por la Sra. LEONOR VILLAVERDE RUTTI, la misma que fue solicitada desde el 16 de diciembre del 2015.

Tercero.- Según del Informe Legal N° 063-2017-GRJ/DRSJ-OAJ, de fecha 22 de Febrero del 2017, se opina LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, de fecha 02 de marzo del 2016, respecto a la nulidad formulada por la Sra. DIONISIA PASCUALA CATAÑO CRISÓSTOMO e improcedente el otorgamiento de plaza de enfermera por los argumentos expuestos en el presente, dicho informe legal sirvió de base para la emisión de la Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 27 de febrero del 2017, que en los mismos términos que el informe legal, se DECLARARÓ LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, de fecha 02 de marzo del 2016, conforme a las consideraciones que ella expone.

Cuarto.- Con fecha 28 de febrero del 2017, la Sra. LEONOR VILLAVERDE RUTTI -en adelante la impugnante- formula recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH, a fin que el superior en grado revoque la apelada y en consecuencia se mantenga vigente la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, puesto que se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento y derecho de defensa, ya que previamente a declarar la nulidad de



GRDS

REG. N° 1987258



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

oficio de la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, debió correrse traslado para presentar sus descargos u oposiciones, conforme lo señala el numeral 202.2 del artículo 202° de la Ley N° 27444, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1272.

Quinto.- Considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado, y habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde efectuar el análisis, respecto de la solicitud planteada por el administrado. En ese mismo contexto, resulta importante tener presente que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario competente.

Sexto.- De la revisión de autos se logra apreciar que la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG de fecha 02 de marzo del 2016, es declarada nula de oficio, mediante Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 27 de febrero del 2017, debido que la impugnante, en su solicitud de reasignación por salud de fecha 18 de diciembre del 2016, no adjuntó documento alguno que acredite las razones que justifiquen la procedencia de su solicitud para el consecuente otorgamiento de su reasignación; asimismo se ha evidenciado el exceso de autoridad la Directora General del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" de Huancayo, debido que en la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG en el primer considerando establece: "... por necesidad de servicio en este nosocomio..." Sic., sin embargo dicha necesidad de servicio jamás ha sido justificada, es más en la plaza vacante, previamente no se ha llevado a cabo el correspondiente concurso de ascenso, por lo tanto ésta no ha quedado disponible para reasignación por no haber sido cubierta; conforme lo establece legalmente en el Manual Normativo de Personal "Desplazamiento de Personal" N° 002-92-DNP, siendo nulo ipso jure el procedimiento efectuado para emisión de la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, de fecha 02 de marzo del 2016, de tal manera se ha transgredido normas esenciales de procedimiento, deviniendo en nulo todo lo actuado administrativamente. De igual modo, la Resolución Directoral N° 417-2014-GRJ-DRSJ-RSVM/URRH, que nombra a la impugnante en su cargo de enfermera, tiene vigencia a partir del 01 de enero del 2015, la misma que en su Artículo Cuarto señala: "A efectos de resguardar la atención de Salud, queda prohibido que la Profesional de la Salud No Médico Cirujano, que pasa a la condición de Nombrado pueda desplazarse a otro establecimiento de Salud durante los cinco (05) siguientes al nombramiento, excepcionalmente podrá solicitar permuta con la debida sustentación del Caso", interpretándose literalmente de la misma, que para la procedencia de su desplazamiento, debe transcurrir el requisito sine qua non de permanecer en su plaza por el periodo de 05 años, el mismo que no ha sido respetado en el caso concreto, pues se la ha reasignado al año y dos meses de dicho nombramiento, violándose los alcances del numeral 15.2 de las Disposiciones complementarias finales d) Lineamientos



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

para el proceso de nombramiento de los Profesionales de la Salud de los Gobiernos Regionales, bajo el amparo de la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, aprobado con el Decreto Supremo N° 034-2014-SA; por lo que la reasignación de Doña Leonor Villaverde Rutti es nula ipso jure.

Séptimo.- A tenor de lo esgrimido precedentemente, se logra apreciar que la Resolución que reasigna a la Impugnante, ha violado flagrantemente las normas que regulan la materia, en consecuencia la pretensión sobre planteada por ésta, sobre mantenerse la vigencia de la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, deviene en INFUNDADA.

Octavo.- Si bien es cierto, la Nulidad de oficio es una FACULTAD EXCLUSIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA que le permite declarar de oficio la nulidad de sus actos administrativos siempre y cuando se encuentre inmerso dentro de los vicios de acto administrativo contemplados en el artículo 10° del mismo cuerpo normativo, que sirve para proporcionar a la Administración una salida para subsanar o eliminar los vicios incurridos en sus actos administrativos, aun estos hayan adquirido la calidad de firmes, o por falta de adecuación de alguno de los elementos del Acto Administrativo (el cual presuntamente se encuentra viciado) y por tanto afectan de manera parcial o total la validez del Acto Administrativo; asimismo cabe indicar que la llamada nulidad de oficio, puede operar cuando el acto administrativo haya sido dictado en contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, y cuando resulten contrarios al ordenamiento jurídico.

Noveno.- Sin embargo, revisado el procedimiento administrativo se logra apreciar que previamente a la declaratoria de nulidad de oficio, recomendada por la Jefa de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud mediante Informe Legal N° 063-2017-GRJ/DRSJ-OAJ de fecha 22 de Febrero del 2017 que indujo a error al Director Regional de Salud, se debió advertir que se corra traslado a la afectada por dicha nulidad, a fin de no vulnerar su derecho al debido procedimiento y derecho de defensa, conforme se encuentra regulado en el numeral 161.2 del artículo 161° y el numeral 202.2 del artículo 202° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, que brindan la posibilidad de otorgar un plazo perentorio de cinco (05) días para que el administrado afectado por la posible nulidad de oficio pueda presentar sus descargos o alegatos, hecho que ha sido vulnerado por la autoridad administrativa competente.

Décimo.- En ese sentido, habiendo quedado claramente establecido que se debe otorgar oportunidad para presentar sus descargos a la impugnante, con la finalidad que posibilite ejercer su derecho de defensa, así lo señala el Maestro Morón Urbina, "(...) deriva razonablemente del principio del debido procedimiento administrativo y de los artículos 3.5, 161.2, 187.2, que ninguna autoridad administrativa podrá dictar una anulación de oficio, sin otorgar anteladamente oportunidad al interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria de oficio debe ser notificada a los administrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad"; en consecuencia, para declarar la nulidad de un acto administrativo, previamente debió otorgarse un plazo



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

perentorio de 05 días a la impugnante para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo.

Undécimo.- En relación a lo establecido precedentemente, resulta necesario señalar que artículo 139, inciso 3) de la Constitución, establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia al debido proceso, siendo este atributo por lo demás y de cara a lo que establece la jurisprudencia, admite dos dimensiones, una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera, el debido proceso está concebido como un derecho que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone fin al proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, por lo tanto en caso concreto, no se ha respetado el derecho al debido procedimiento reconocido de manera expresa en numeral 1.2 del artículo IV del Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, señalando: "Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten."

Duodécimo.- Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente se evidencia que se ha incurrido en el supuesto de nulidad previsto en el numeral 2) del Artículo 10° de la Ley N° 27444, al haberse observado que existen vicios que causan su nulidad de pleno derecho, pues existe omisión del requisito de validez contemplado en el numeral 5 del artículo 3° del mismo cuerpo normativo, referido al procedimiento regular; entendiéndose que antes de la emisión del acto administrativo recurrido, se debió cumplir con todas las acciones que requiere el procedimiento administrativo, previo para su generación, hecho que ha sido vulnerado al no haberse respetado el derecho de defensa y debido procedimiento, por lo tanto debe declararse fundado en parte el recurso de apelación planteado por la Sra. LEONOR VILLAVERDE RUTTI, contra la Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 27 de febrero del 2017, por lo tanto nulo todo lo actuado hasta la etapa que se notifique los cargos imputados a fin de respetarse su derecho al debido procedimiento y derecho de defensa, asimismo se vuelva a emitir un acto administrativo válido, en observancia estricta del marco normativo vigente.

Por lo expuesto, el suscrito firma la presente Resolución el cumplimiento del Memorando N° 180-2017-GRJ/GRDS su fecha 16 de Marzo del 2017, sobre delegatura de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, conforme a las facultades establecidas en el Artículo 72° de la Ley N° 27444; y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal d) Artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias:



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por Sra. LEONOR VILLAVERDE RUTTI contra la Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH de fecha 27 de febrero del 2017, en consecuencia **NULA** dicha resolución, por contravenir los Derechos fundamentales al Debido Procedimiento y Derecho de Defensa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo hasta la etapa procedimental, donde se notifique oportunamente a la Sra. LEONOR VILLAVERDE RUTTI, a fin que pueda realizar sus respectivos descargos contra las imputaciones realizadas mediante Solicitud de Nulidad de Oficio de la Resolución Directoral N° 074-2016-HRDMI-EC/DG, planteadas por la Sra. Dionisia Pascuala Cataño Crisóstomo, y se vuelve a emitir un nuevo acta administrativo en aplicación estricta del marco normativo que regula la materia, respetándose el derecho al debido procedimiento y derecho de defensa, expuesto en la parte considerativa del presente.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Salud, para el deslinde de responsabilidades de la Jefa de Asesoría Jurídica de dicha entidad, por la emisión del Informe Legal N° 063-2017-GRJ/DRSJ-OAJ de fecha 22 de Febrero del 2017, que sirvió como fundamento de la Resolución Directoral N° 226-2017-DRSJ/OEGDRH, la misma que indujo a error al Director Regional de Salud, generando su responsabilidad administrativa, conforme se encuentra prescrito por el numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 27444.

ARTÍCULO CUARTO.- DEVOLVER el expediente administrativo a la Dirección Regional de Salud Junín, a fin de mantener un único expediente conforme se encuentra establecido en el Artículo 150° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR copia de la presente resolución a la interesada, a la Dirección Regional de Salud Junín y a los demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Medina M

Lic. Máximo José Medina Morales
ENCARGADO DE LA GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO SOCIAL
G.R.J.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes.

HYQ. 1 24 MAR 2017

Antonieta Vidalón Robles
Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL